



Exp.: 001-00079070 Ley de Transparencia
Asunto: Exp. 17/2023 LGT-SGAT

RESOLUCION

VISTO el expediente administrativo iniciado por solicitud de acceso a información pública presentada por XXXXXXXXXX, y teniendo en consideración los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Con fecha 25 de abril de 2023, se inicia la tramitación de este expediente que tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia de este Ministerio mediante escrito de petición de XXXXXXXXXX, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, quedando registrada con el número 001-00079070.

Segundo: El contenido de la solicitud es el siguiente:

"Recientemente se me ha abierto un expediente disciplinario donde, entre otras presuntas infracciones, se me acusa de acoso laboral durante el período comprendido entre los años 2015 a 2023. Yo, no tengo constancia de tal extremo. En este sentido, SOLICITO: Acceso a todas las denuncias que se han presentado contra mí por acoso laboral que consten en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Barcelona."

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Directora del Organismo público Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida la competencia para conocer y resolver el presente expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida que dicho órgano es el que posee la información solicitada.

Segundo: El artículo 12 de la Ley transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, precepto que es desarrollado por la citada Ley.

CORREO ELECTRÓNICO/WEB:

itssgat@mites.gob.es
www.mites.gob.es/itss

Página 1 de 4

Pº de la CASTELLANA, 63
28071 MADRID
TEL: 91 363.11.63/64/64/30393
D R:EA0021862

CSV : XXXXXXXXXX

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : CARMEN COLLADO ROSIQUE | FECHA : 18/07/2023 16:14 | Sin acción específica



Tercero: Con respecto al contenido de la solicitud, se interesa el "Acceso a todas las denuncias que se han presentado contra mí por acoso laboral que consten en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Barcelona." A este respecto debemos aclarar que los únicos sujetos que pueden ser investigados son aquellos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, pueden resultar sujetos responsables de la comisión de infracciones en el orden social.

Partiendo de esta base, las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad para investigar posibles situaciones de acoso laboral se dirigen a depurar la posible responsabilidad de los empleadores en esta materia. Por tanto, el sujeto denunciado no será, normalmente, una persona física sino el empleador. En el caso concreto [REDACTED] no identifica la empresa, siendo el período de referencia el comprendido entre 2015 y 2023. Por tanto, con la información facilitada resulta imposible determinar cuántos y cuáles serían los expedientes solicitados.

Asimismo, al solicitar la información correspondiente a la provincia de Barcelona, se produce un problema añadido que se deriva de la existencia de un traspaso parcial de las funciones y servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a determinadas Comunidades Autónomas. Tras la aprobación del Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña en materia de Función Pública Inspector de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, parte de la información solicitada debe facilitarse por la Generalitat de Cataluña que han asumido el ejercicio de las funciones inspectoras en las materias de competencia autonómica. Por tanto, parte o todos estos expedientes pueden obrar en la citada administración pública.

En relación con esta cuestión y como ha indicado el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo CI/007/2015, al interpretar la causa de inadmisión de una solicitud en base a lo previsto en el artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, "el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada."

Por tanto, el contenido de esta parte de la solicitud no puede facilitarse al solicitante al no estar disponible la información, por no estar identificadas las actuaciones y por la necesidad de solicitar a distintas unidades y órganos administrativos, incluso de otras administraciones públicas (Generalitat de Cataluña). Todo ello implica una reelaboración de la información actualmente existente, siendo preciso realizar una serie de tareas que van más allá de la mera recopilación de información.

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL





Cuarto: Por otro lado, debemos señalar que el Convenio nº 81 de la OIT (ratificado por España el 30 mayo 1960 y actualmente en vigor), relativo a la inspección del trabajo en la industria y el comercio, en su artículo 15 apartado c, establece que: *"los inspectores del trabajo **deberán considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja** que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales, y no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado por haberse recibido dicha queja."*

En el artículo 20 apartado c del Convenio nº 129 de la OIT (ratificado por España el 05 mayo 1971), relativo a la inspección del trabajo en la agricultura, se establece una redacción similar.

En nuestro ordenamiento interno, el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 julio Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante LOITSS), también regula este deber de sigilo de forma expresa:

"1. Los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social considerarán confidencial el origen de cualquier queja de que conozcan, en el ámbito de la función inspectora, sobre incumplimiento de las disposiciones legales.

2. También vendrán obligados a observar secreto y a no revelar, aun después de haber dejado el servicio, los datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, salvo para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda."

El artículo 10 del Real Decreto 138/2000, de 4 febrero Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se pronuncia en la misma línea señalando:

"1. Los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberán guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las denuncias o antecedentes de que hubieren tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, en los términos del artículo 12 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. El personal sin funciones inspectoras que preste servicios en órganos y dependencias del sistema de inspección queda sujeto a los mismos deberes de sigilo acerca de lo que conozca por razón de su puesto de trabajo."

En base a la normativa relacionada, el alcance de este deber de sigilo no se limita, en el caso de las denuncias, a guardar secreto sobre la identidad del denunciante sino también a la propia existencia de una denuncia, considerando absolutamente *"confidencial el origen de cualquier queja"* y *"no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado por haberse recibido dicha queja"*.

Por tanto, la redacción de la Ley 23/2015 es tajante al prohibir, de forma específica y más allá de la propia relación de servicio, la difusión de cualesquiera *"datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento"*. La propia Ley también nos indica en qué supuestos no resulta



aplicable esta prohibición y será, exclusivamente, *"para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda"*.

En último término debemos señalar que el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, establece como límite del derecho de acceso a la información pública (apartado e) *"La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios"*, así como (apartado j) *"El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial"*. En el caso que nos ocupa existe un deber específico de reserva que deriva tanto de una Ley específica como de Tratados Internacionales ratificados por España, sin que la solicitud se ajuste a ninguno de los supuestos en que cede el citado deber de secreto profesional.

No debemos olvidar, igualmente, que la disposición adicional primera 2 prevé que *"Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información"*, lo que implica que debe ser de aplicación lo previsto en la citada Ley 23/2015 en lo relativo a las limitaciones de acceso a la información en los términos aludidos.

Por cuanto antecede, la **DIRECTORA DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE:**

DENEGAR la solicitud de acceso a la información solicitada por aplicación del artículo 14.1 apartados e) y j) de la Ley 19/2013 en los términos previstos en la presente resolución.

Notifíquese esta resolución al solicitante, advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

LA DIRECTORA DEL ORGANISMO ESTATAL

(documento firmado electrónicamente)

Carmen Collado Rosique

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

